

El problema de la ejecución de sentencias del Recurso de Protección

Las causas sobre las devoluciones de fondos pagados en exceso a las Isapres, han vuelto a poner en el centro el dilema del **cumplimiento de las sentencias de protección**, a partir de las sentencias definitivas de la Corte Suprema.

Esto lleva a los siguientes 3 problemas:

1. **Cosa juzgada.**
2. **Ejecución incidental de la sentencia para particulares.**
3. **Cumplimiento de las sentencias de protección por las autoridades.**

1. COSA JUZGADA FORMAL.

La Constitución dispone que esta acción de protección es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes” (artículo 20, parte final del inciso primero).

Esa norma es central para identificar el efecto definitivo de las sentencias de protección de la Corte Suprema. Eso implica resolver algunas dimensiones de lo que la doctrina entiende por “cosa juzgada”, cuyo objeto es impedir que vuelva a verse un asunto ya resuelto jurisdiccionalmente.

El efecto de cosa juzgada supone “la obligatoriedad de lo resuelto. su ejecutabilidad, su inmutabilidad y definitividad. En esta línea se define a la cosa juzgada como la autoridad y eficacia de una sentencia judicial cuando no existen contra ellas medios de impugnación que permitan modificarla”¹.

Esta determinación implica activar todos los efectos propios de la cosa juzgada. En primer lugar, hay que verificar si produce **“cosa juzgada material”**, esto es, la decisión jurisdiccional inmutable e irrevisable en un juicio posterior.

Hay dos razones para desestimar un efecto material a la cosa juzgada producida por la acción de protección. Una finalista y otra procesal.

El sentido de la acción de protección se vincula con su finalidad cautelar de remediar una disposición de medidas que permitan asegurar la protección del afectado y restablecer el imperio del derecho.²

Y la razón procesal es el carácter del procedimiento de la acción de protección que se da en un marco habitualmente ajeno a un procedimiento contradictorio y bilateral

¹ ROMERO SEGUEL, Alejandro (1999), “Notas sobre la cosa juzgada en el recurso de protección”, Revista Chilena de Derecho, Vol. 26, Universidad Católica de Chile, pp. 503 y sgtes.

² En general, la doctrina constitucional y procesal que se ha pronunciado sobre el punto está de acuerdo en el alcance de cosa juzgada formal que tiene la acción de protección. Ver por todos, BRONFMAN, Alan, MARTÍNEZ, José Ignacio y NÚÑEZ, Manuel (2012), Constitución Política Comentada, Abeledo Perrot, p. 478.

bajo todos los supuestos del debido proceso. Es un procedimiento sumarísimo de urgencia que produce solo los efectos que permiten retrotraer el estado de cosas al momento previo de los actos u omisiones atentarios al derecho. Por lo mismo, dentro de las notas de este procedimiento se sostiene que es un procedimiento constitucional autónomo, excepcional, no es exclusivo ni sustitutivo de otros procedimientos, y tiene un carácter breve, concentrado y de tramitación preferente.³

Esto es lo que se caracteriza como **cosa juzgada formal**, esto es, que la sentencia adquiere firmeza y por ende no puede intentarse una acción o recurso en su contra.

De este modo, el efecto concreto que produce la acción de protección es la imposibilidad de poder plantear otra acción de protección sobre un asunto que ya está resuelto. Sin embargo, la frase de “sin perjuicio de los demás derechos ...” podría llevar a discutirse en el fondo las circunstancias de esta cosa juzgada formal. Es teóricamente posible que pueda existir un concurso de acciones que habilite la presentación concurrente de una acción de protección y una tutela labora de derechos fundamentales por discriminación o el mismo dilema entre la acción de protección y la Ley Antidiscriminación.

El problema de fondo será el modo en que el sentenciador defina los términos resolutivos de la sentencia: **¿sentencia declarativa o constitutiva?**

En el caso de la devolución de fondos de las Isapres, **la Corte Suprema no solo le dio la razón a las partes que concurrieron (efecto declarativo) sino que determinó una innovación en el ordenamiento (efecto constitutivo) y ordena devolver fondos en una cuantía que no determina pero que ordena determinar**. Con ello producen una alteración del modo en que estaban operando las estimaciones de costo de los precios base y de la interpretación de los valores GES de los contratos de salud.

Volveré en las conclusiones sobre este asunto.

2. EJECUCIÓN INCIDENTAL DE LA SENTENCIA POR PARTICULARES.

Uno de los efectos naturales de la sentencia definitiva a favor de determinados particulares es que, conforme a los principios de la tutela judicial efectiva (art. 19 numeral 3 inciso primero en relación con el artículo 76 de la Constitución) tienen derecho a la ejecución de lo resuelto.

Para ello, hay dos dilemas. Uno es quiénes pueden hacerlo. Y lo segundo, es cual es el procedimiento para ejecutarlo.

³ NOGUEIRA, Humberto (2008), Derechos fundamentales y garantías constitucionales, Tomo 1, Cecoch, Librotecnia, pp. 310-313.

Beneficiarios. El efecto natural es que beneficia a quiénes participaron del procedimiento de protección. El Auto Acordado de la Corte suprema que regula la materia razona sobre este principio permitiendo que los afectados o recurridos sean parte.⁴ La sentencia se notifica a los que son parte.⁵ Les reconoce derechos procesales durante el procedimiento.⁶

En consecuencia, cuando quede “firme el fallo de primera instancia por haber transcurrido el plazo para interponer el recurso de apelación, sin que éste se hubiere deducido, o dictado sentencia por la Corte Suprema cuando fuere procedente, **se transcribirá lo resuelto a la persona, funcionario o autoridad cuyas actuaciones hubieren motivado el recurso de protección, por oficio directo, o por cualquier medio electrónico si el caso así lo requiere.**” (Decimocuarta disposición del AA).

En consecuencia, el problema que plantean estas sentencias es el efecto general que produce muy superior a la determinación de las partes involucradas. Es evidente que el sentido de **las sentencias de la Corte Suprema configuran un efecto general y opera, como si fuera un efecto invalidatorio de un acto normativo con efectos generales.** En consecuencia, no es un dilema de las partes involucradas en el conflicto sino que del carácter general invalidatorio de la norma que sustenta esas devoluciones que no acontecieron.

En cuanto al **procedimiento de ejecución.** “La ejecución de la sentencia, dado su carácter de urgente, debe ser rápida y eficaz ya que de nada serviría tener un juicio expeditivo si la ejecución no lo es. Por esta razón, respecto de la acción de protección existen reglas generales que establece el ordenamiento jurídico: si se trata de actos de particulares podrá acudir a una ejecución incidental de los artículos 233 y siguientes del Código de Procedimiento Civil,, y si se trata de una decisión que obliga a un organismo del Estado, la autoridad respectiva debe disponer lo necesario para acatar lo resuelto”.⁷

⁴ 4º.- Las personas, funcionarios u Órganos del Estado **afectados o recurridos, podrán hacerse parte en el recurso**

⁵ 6º.- La sentencia se notificará personalmente o por el estado a la persona que hubiere deducido el recurso y **a los recurridos que se hubieren hecho parte en él.**

⁶ Disposición séptima y novena del AA.

⁷ CONTRERAS, Pablo, GARCÍA, Gonzalo y MARTÍNEZ, Victoria (2016), Diccionario Constitucional Chileno, Hueders, Santiago, p. 39.

Lo anterior, implica que el procedimiento de ejecución se realiza ante quién se dictó la sentencia⁸ y es central el carácter de la sentencia en términos de su configuración declarativa o constitutiva.⁹

Esta reflexión procesal es central para el caso planteado. “En muchos casos la sentencia de protección debe discurrir latamente sobre la base de haber constatado perjuicios materiales y la relación de causa y efecto entre la situación del recurrente y la acción u omisión inconstitucional imputada al recurrido. En algunos fallos se han formulado declaraciones que implícitamente llevan a reconocer una eficacia positiva o prejudicial a la sentencia de protección para un juicio posterior, como ocurrió, por ejemplo, con la sentencia que acogiendo un recurso de protección contra el Tesorero General de la República le ordenó pagar una suma de dinero declarando que ello era "sin perjuicio de los derechos que pueda hacer valer el recurrente en lo que se refiere a los reajustes que menciona en su recurso de protección". (CS, 18 de julio de 1985, RDJ, t. LXXXII, secc. 5", p. 135). En otros casos, en cambio, la misma sentencia de protección previene expresamente que su decisión no prejuzga, ello para que el acto de tutela constitucional no implique un pronunciamiento sobre otras acciones repetitivas e indemnizatorias que el interesado decida intentar por las vías correspondientes.”

En este caso, no solo se ha otorgado un plazo de cumplimiento a las partes sino que no es posible especificar cuánto le corresponde a cada persona que exija su devolución de sus fondos cobrados en exceso por parte de las Isapres.

3. CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA POR LAS AUTORIDADES.

El Auto Acordado número 94-2015 (Acta de la Corte Suprema) dispone lo siguiente al respecto:

“15º.- Si la persona, el funcionario o el representante o Jefe del Órgano del Estado, ya tenga éste la calidad de titular, interino, suplente o subrogante, o cualquiera otra, no evacuar los informes o no diere cumplimiento a las diligencias, resoluciones y sentencias dentro de los plazos que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema ordenaren, conforme a lo establecido en este Auto Acordado,

⁸ Artículo 233 del CPC.- “Cuando se solicite la ejecución de una sentencia ante el tribunal que la dictó, **dentro del plazo de un año contado desde que la ejecución se hizo exigible**, si la ley no ha dispuesto otra forma especial de cumplirla, se ordenará su cumplimiento con citación de la persona en contra de quien se pide.(...).

⁹ Art. 235 3a. “**Si la sentencia manda pagar una suma de dinero se ordenará, sin más trámite, hacer pago al acreedor con los fondos retenidos, hecha la liquidación del crédito** y de las costas causadas o se dispondrá previamente la realización de los bienes que estén garantizando el resultado de la acción de conformidad al Título V del Libro II.”

podrán éstas imponer al renuente, oyéndolo o en su rebeldía alguna o algunas de las siguientes medidas: a) amonestación privada; b) censura por escrito; c) multa a beneficio fiscal que no sea inferior a una unidad tributaria mensual ni exceda de cinco unidades tributarias mensuales; y d) suspensión de funciones hasta por cuatro meses, tiempo durante el cual el funcionario gozará de medio sueldo. Todo ello además de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir dichas personas.”

Esta norma contiene implícitamente un procedimiento de ejecución. En este caso, hay una referencia expresa a la determinación de cumplimiento “dentro del plazo” que la propia Corte Suprema haya ordenado. Mientras exista ese plazo vigente no hay una modalidad de ejecución plausible de la sentencia.

La otra parte del procedimiento de ejecución es la verificación de razones por parte del renuente para no poder cumplir la sentencia. Parece indicar un formato de ser oído y una eventual declaración de rebeldía.

Después de estas etapas y solo ahí se determinan acciones de presión sobre las autoridades que deben cumplir la sentencia, desde amonestación hasta la suspensión de funciones, ninguna de las cuales se vincula al fondo del asunto planteado en las causas.

4. INTERVENCIÓN EL CONGRESO NACIONAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.

El artículo 76 de la Constitución impide que se vulnere la independencia judicial del siguiente modo:

“Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos.”

Esta norma ingresó al ordenamiento durante el siglo XIX y el artículo 99 de la Constitución de 1833 disponía una norma parecida que tiene su origen en la Constitución de Cádiz que indicaba que:

“Art. 243º: Ni las Cortes ni el Rey podrán ejercer en ningún caso las funciones judiciales, avocar causas pendientes ni mandar abrir los juicios fenecidos.”

No se trata de examinar esta norma que tiene muchas debilidades para garantizar en estado puro la independencia judicial. En este caso, resulta claro que nadie ha ejercido funciones judiciales, no se ha avocado a una causa pendiente, porque la ejecución de las sentencias es una dimensión que puede entregarse a la ley.

“Para hacer ejecutar sus resoluciones, y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales ordinarios de justicia y los especiales que integran el Poder Judicial, podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercer los medios de acción conducentes de que dispusieren. Los

demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine.” (art. 76 de la Constitución).

El que se determine, explícita o implícitamente, que una modalidad de cumplimiento de una sentencia pueda realizarse mediante una ley o un acto administrativo es el resultado de una decisión judicial que busca ejercer “los medios de acción conducentes de que dispone” los que de acuerdo al artículo 20 de la Constitución abarca “todas las providencias que juzgue necesarias para el restablecer el imperio del derecho”.

La limitación de la ejecución consiste en que “la autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar.” (artículo 76 de la Constitución).

En este caso, al haberle dado un plazo y extenderlo importa una reevaluación de un cumplimiento que no es mero trámite.

SÍNTESIS EJECUTIVA

1. Las sentencias definitivas de protección solo producen cosa juzgada formal e impiden que mediante otras acciones de protección rever lo decidido. Posibilidad de revisión de lo resuelto es muy baja y quedan pendientes la discusión sobre su ejecución.
2. En el caso de la devolución de fondos de las Isapres, **la Corte Suprema no solo le dio la razón a las partes que concurrieron (efecto declarativo) sino que determinó una innovación en el ordenamiento (efecto constitutivo) y ordena devolver fondos en una cuantía que no determina pero que ordena determinar.** Con ello producen una alteración del modo en que estaban operando las estimaciones de costo de los precios base y de la interpretación de los valores GES de los contratos de salud.
3. El problema central reside en el efecto constitutivo o declarativo de la sentencia. A todas luces es **imperfectamente constitutiva** porque **extiende los beneficiarios a todos**, como resultado de entender los efectos generales invalidatorios de la norma que está en discusión, más allá de las partes. Pero es imperfecta porque no estimatoria de una deuda apreciable en dinero determinadamente.
4. La vía incidental de cumplimiento está pendiente doblemente del plazo dispuesto por la Corte Suprema como por la indeterminación de lo que corresponde por concepto de devolución a cada cotizante.

5. La vía compulsiva contra las autoridades por incumplimiento de la sentencia está pendiente por decisión de la propia Corte.
6. No hay vulneración de la independencia judicial si es la misma Corte la que adopta una ejecución de sentencia que involucre una determinación explícita o implícitamente implique la vía única para su cumplimiento. La única limitación es que no es posible cuestionar la justicia o legalidad de la decisión adoptada. Es una fase del cumplimiento y no un nuevo momento normativo.

LA DEMOCRACIA CRISTIANA, EL CAPITALISMO Y EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRÁTICO

DE DERECHO

I. EL PUNTO DE PARTIDA: LA ILUSIÓN DE UN MODELO ALTERNATIVO

La Democracia Cristiana fue el reflejo histórico de su tiempo en el siglo XX. Una de las mejores síntesis conceptuales para salir de la Guerra Fría. Ni capitalismo ni comunismo. Ni estatismo ni libertarismo. Ni dictadura del proletariado ni fascismo. Ni cristianismo preconiliar ni cristianismo revolucionario. Democracia en los medios, cristianismo en los fines.

Esas dicotomías también abarcaban los propios instrumentos de cambio o transformación: ni revolución ni statu quo.

Su reformismo no fue tibio ni condescendiente. Su papel fue central en la modernización del país. Como fin del Estado de Compromiso del siglo XX que excluía del desarrollo a los sectores populares y campesinos. La reforma agraria, la chilenización del cobre o la promoción popular fueron la manifestación inequívoca de la voluntad de transformación de un país pobre y excluyente en uno que saliera de su condición precaria. Como integración de su actividad al dinamismo social, económico y, sobre todo, humano. Como inicio de la planificación sustentable de nuestro desarrollo.

Así como la DC de los convulsos 60 dejó su huella central en el sistema político, la democracia a la cual contribuimos a recuperar le permitió su enorme tarea de incluir a nuestro país en el mundo. La globalización fue interpretada correctamente en un contexto de gobierno de coalición concertacionista, que le permitió al país tener estabilidad económica, crecimiento sostenido y haber podido tener logros sociales indudables: reducción sustantiva de la pobreza, mejora de los indicadores de esperanza de vida, acceso a la educación y progreso social. Esos resultados pusieron a Chile ante una oportunidad inmejorable. Ya no se trataba de superar la pobreza, sino que quedábamos a medio camino del desafío de ser el primer país latinoamericano en ser genuinamente desarrollado.¹

Hay que recordar que en medio de las dos grandes intervenciones políticas de la DC en la historia, el capitalismo vivió su edad dorada entre 1945 y 1973 destacando en todos los frentes: crecimiento, empleo y estabilidad y con un contexto que permitió el desarrollo de los estados de bienestar.²

En este tránsito entre los dos grandes ciclos históricos la DC abandonó su idea de sustituir un modelo económico, entre otras cuestiones, porque el contexto que le tocó vivir obedecía a reglas ideológicas y macroeconómicas muy diferentes. Cuando el comunismo se derrumbó, se reestructuraron los términos de este dilema. Los

¹ Fernando Cardoso y Alejandro Foxley (2009), A medio camino, Uqbar, Santiago.

² Ha-Joon Chang (2015), Economía para el 99% de la población, Debate, Barcelona, pp. 82-89.

intersticios de la tercera vía³ dejaron de concebir al mundo económico como un ejercicio binario e ingresaron abiertamente a modalidades sociales, ecológicas o humanitaristas del mercado y el capitalismo.

Los tiempos del pensamiento único⁴ y el fin de la historia⁵ que produjo el triunfo del capitalismo y la democracia occidental, reconfiguraron una sensación momentánea de fin del debate económico.⁶ Sin embargo, la contracara de este espacio unilateral se reflejó en la política internacional y en un triunfo también militar desde la Guerra del Golfo hasta un conjunto de invasiones en diversos países (Irak, Afganistán, Siria, etc.) . Esta dimensión entró en cuestión por el efecto político terrorista el 2001 en EE.UU. y por la campanada que produjo la crisis *subprime* en el mundo el 2008.⁷

La ilusión modélica de la vía propia al capitalismo se esfumó y lo que eran aspiraciones a sustituirlas implicaron una reformulación humanista del capitalismo. El modelo no se cuestionaba, pero se trabajaba sobre sus efectos perversos. La mirada centrada en las pequeñas empresas, las cooperativas y las agrupaciones campesinas o directamente de los consumidores, reflejaron solo parciales objetivos del desafío económico para partidos como la DC.

Su transición desde las vías alternativas a una construcción de un camino atenuado de tolerancia capitalista dejó de por medio algunas señales de la Democracia de aceptación al mercado, y la globalización, pero con críticas a sus efectos en derechos sociales, medio ambiente y comunidades. La cuestión de fondo sigue siendo el capitalismo mismo.

II. VARIEDADES DE CAPITALISMO.

El despliegue del capitalismo es muy variado. Los chinos redefinieron el capitalismo del Estado⁸ y siguen sin democracia. Los rusos reestructuraron el capitalismo sin adaptar sus modos feudales y oligárquicos, transfiriendo el poder desde el Partido Comunista a antiguos funcionarios estatales mediante privatizaciones de parte de la industria y agricultura, aunque manteniendo posiciones estratégicas a favor del Estado.

Las vías no capitalistas son anacrónicas y agonizantes (Corea del Norte y Cuba) y el socialismo del siglo XXI es una pantomima de oligarquía partidaria, feudalismo y corrupción (Nicaragua y Venezuela).

³ Anthony Giddens (1999), La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia, Taurus, Madrid.

⁴ Joaquín Estefanía (2000), Contra el pensamiento único, 2000, Debolsillo.

⁵ Francis Fukuyama (1992), El fin de la historia y el último hombre, Planeta, Madrid.

⁶ Joseph Stiglitz (2003), Los felices 90. La semilla de la destrucción, Taurus, Buenos Aires.

⁷ Paul Krugman (2009), De vuelta a la economía de la gran depresión y la crisis del 2008, Editorial Norma, Colombia.

⁸ Claudio González, (2021), El gran sueño de China. Tecno-socialismo y capitalismo de Estado, Tecnos, Madrid.

El mundo asiático tiene el predominio del desarrollo mundial, de sus liderazgos actuales y potenciales y todos empujan el carro del capitalismo, aunque no de la democracia necesariamente.

Hay modelos de desarrollo que han pasado de la pobreza al desarrollo acelerado en un corto lapso de tiempo histórico (Corea del Sur, Singapur y Taiwán), que se unieron al paradigma tecnológico que representaba Japón hace décadas.

En todos estos ejemplos exitosos hay una sinergia significativa con las instituciones democráticas. Los países que fracasan en la economía es porque fracasan antes en sus instituciones.⁹

Hoy el capitalismo tiene desafíos regulatorios de otra intensidad. No por nada se cuestiona el capitalismo de compinches¹⁰ o el capitalismo de casino centrado en flujos financieros de oportunismo y conflictos de interés.

Pero sobre todas las cosas se cuestiona del capitalismo sus efectos institucionales sobre la ampliación de la desigualdad, el control del mercado, la manipulación de los mercados, el abuso de poder dominante, y la concentración monopólica y oligopólica.

En este marco, no es tarea sencilla ni trivial reformular el capitalismo y ponerlo al servicio del bien común de los ciudadanos.

Una manera de renunciar a luchar contra el capitalismo es idear la ilusión de un camino alternativo en el vacío, un modelo falso, retórico y de fantasía barata. La vía cubana o nicaragüense se desbrozan en esa ampulosa reacción antiyanqui, mientras su pueblo está ajeno a esos avatares.

La eficacia de la “destrucción creadora”¹¹ del capitalismo reside en esa enorme capacidad de reordenamiento y reinvento que posee, expurgando sus males como cola de lagartija. Y su muerte, fin, extinción, o colapso anunciado por tantos profetas detrás de cada gran crisis ha terminado con la desacreditación de los profetas.¹²

⁹ Darren Acemoglu y James Robinson (2014), ¿Por qué fracasan los países?, Booket.

¹⁰ Anne O. Kruger, «Why Crony Capitalism is Bad for Economic Growth» en Stephen Haber (ed.) (2002) *Crony Capitalism and Economic Growth in Latin America. Theory and Evidence*, en <http://www.hoover.org/publications/books/crony.html>, pp. 1-24.

¹¹ Joseph Schumpeter (2015), *Capitalismo, socialismo y democracia*, Página indómita, Barcelona.

¹² Desde Karl Marx a McKenzie Wark (2022), *El capitalismo ha muerto. El ascenso de la clase vectorialista*, Holobionte ediciones. La clase vectorialista posee los vectores de la información, los copyrights, las patentes y las marcas, los sistemas logísticos, las herramientas financieras y los algoritmos, como la manifestación de una clase emergente que toma el control. ¿Esto es finalizar el capitalismo?

Francesco Boldizzone (2023), *Imaginando el final del capitalismo. Desventuras intelectuales desde Karl Marx*, Akal, Barcelona. El capitalismo ha sobrevivido a las predicciones de su desaparición no, como muchos piensan, por su eficiencia económica o por las virtudes intrínsecas de los mercados, sino porque está arraigado en la estructura jerárquica e individualista de las sociedades occidentales modernas

Pero los límites del capitalismo existen y son centrales de abordar. Ya no se trata solo de doblegar los “fallos del mercado”¹³ sino que de dominar todas sus técnicas manipulativas¹⁴ con el objeto de reorientar la economía del comportamiento¹⁵ a objetivos más humanos, pero sobre todo, conducentes a la utilidad de las personas, a cambiar efectivamente sus condiciones de vida¹⁶ y a realizar los derechos fundamentales de todos.

No solo tener un mercado sin fallas, bajo una competencia perfectible sino que uno tendiente a resolver su doble talón de Aquiles: la desigualdad¹⁷ y su crisis climática.¹⁸

No son tiempos para reinventar un camino desde la nada y hacer perder tiempo valioso en afrontar las principales crisis de nuestro tiempo dentro del mercado, con vías estatales fuertes y con derechos sociales y liberales fuertes y sólidos.

Por lo mismo, hay dimensiones de lo que se denomina multicapitalismo¹⁹ en donde ya se manifiesta un capitalismo no solo financiero, sino que ecológico, social e intangible relativo a la cultura empresarial, el compromiso de los empleados, la reputación o la capacidad de innovación.

Esta variedad de capitalismos bajo estructuras de mercado, solo tiene un dilema por delante. ¿Cómo redefinir el papel del Estado para afrontar con autoridad y legitimidad un tiempo presente complejo en sociedades democráticas divididas?

Para los regímenes democráticos existe un instrumento que los chilenos no hemos ensayado. Esa opción se denomina Estado Social y Democrático de Derecho (ESDD).

III. EL ESDD, LA NUEVA CONSTITUCIÓN Y LA REFORMULACIÓN DEL CAPITALISMO

Una de las primeras condiciones de la economía es el restablecimiento de un estatuto normativo que garantice reglas del juego básicas. Detrás de esto está la tesis de redefinir las bases constitucionales y legales de nuestro ordenamiento.

¹³ Jean Tirole (2017), La economía del bien común, Taurus, Barcelona, pp. 171-190. Chang: 2014: 341-362.

¹⁴ George Akerlof y Robert Schiller (2016), La economía de la manipulación. Cómo caemos como incautos en las trampas del mercado, Paidós, Colombia.

¹⁵ Daniel Kahneman (2012), Pensar rápido, pensar despacio, Editorial Debate, Barcelona y Cass Sunstein y Richard Thaler (2017), Un pequeño empujón. El impulso que necesitas para tomar mejores decisiones sobre salud, dinero y felicidad, Taurus, Barcelona.

¹⁶ Abhjit Baanerjee y Esther Duflo (2020), Buena economía para tiempos difíciles, Taurus, Madrid.

¹⁷ Thomas Piketty (2014), El capital en el siglo XXI, Fondo de Cultura Económica; Anthony Atkinson (2016), Desigualdad. ¿Qué podemos hacer?, Fondo de Cultura Económica y Nicolás Eyzaguirre(2020), Desigualdad. Raíces históricas y perspectivas de una crisis, Debate, Santiago.

¹⁸ Tirole, 2017: 217-250 y Jeffrey Sachs (2008), Economía para un planeta abarrotado, Debate, Barcelona.

¹⁹ Juan Costa (2021), Multicapitalismo. Por un capitalismo que nos ayude a crear empleo, proteger el clima y frenar la desigualdad, Deusto, España.

Algunos neoliberales piensan que no se necesita de la ley y encaminan sus propuestas a evadirlas y sustraerse de ellas, sosteniendo una especie de libertad natural de los mercados. Poder hacer todo lo que se pueda mientras no vaya contra la ley, pero en ausencia de la ley.²⁰

Esta cuestión nos lleva a recordar que en el origen con Locke: “la libertad se funda en las leyes, donde no hay ley no hay libertad”²¹.

El Estado Social y Democrático de Derecho (ESDD) es una de las respuestas institucionales a la asunción de objetivos más complejos en relación con una sociedad democrática que demanda, tanto libertad para el despliegue de sus planes de vida como de bienes públicos que permitan el alcance de esas libertades para todos. La consideración de derechos sociales y ambientales, en el siglo XXI, no es una cuestión de opcional cumplimiento. Es una obligación asumirlo porque las condiciones de la vida colectiva están amenazadas.

EL ESDD es una transformación del Estado Liberal del s. XIX y su objetivo es incluir como deber estatal la remoción de obstáculos²² y de promoción de la solidaridad²³ para alcanzar igualdad social y prosperidad para todos. Implica una transformación central de los Estados, porque aparece su función prestadora de bienes sociales, admite su intervención reguladora en la economía incluyendo crear empresas e invierte la relación individuo/Estado y sociedad/Estado permitiendo que las libertades sean para todos una realidad.

Este proceso constitucional fue el resultado de la transformación del Estado contemporáneo que deja atrás la inactividad estatal liberal y los deberes de no interferencia asumiendo las funciones de la procura existencial de sus ciudadanos con diversas variaciones. Detrás de la noción de Estado social hay una oposición al Estado socialista.²⁴ El Estado Liberal fracasó porque **no pudo adaptarse a las demandas que**

²⁰ Arturo Fernando (2014), Derecho Constitucional Económico, Tomo II, Ediciones UC, Santiago. “La regulación económica, por definición, altera el funcionamiento natural del mercado, a menos que persiga explícitamente su protección (prohibición del fraude, exigibilidad de los contratos celebrados, etc.) o corregir sus defectos (legislación antimonopolios, regulaciones que maten la asimetría de información). (...) Y de la lectura “del referido numeral 21 (del artículo 19 de la Constitución) no se deduce que la situación de regulación sea el *estado natural* de una actividad económica; ni mucho menos que la Constitución exija que las actividades económicas sean reguladas”. (pp. 62 y 71).

²¹ Daron Acemoglu y James Robinson (2019), El pasillo estrecho, Ediciones Deusto, Barcelona, p. 14.

²² Cláusula constitucional española: “Art. 9.2. Corresponde a los poderes **públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud** y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”.

²³ Cláusula constitucional italiana: art. 2: “La república reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, ora como individuo, ora en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y **exige el cumplimiento de los deberes inexcusables de solidaridad política, económica y social.**”

²⁴ Manuel García Pelayo (1977), La transformación del Estado contemporáneo, Alianza, Madrid.

generó la Revolución Industrial, ampliando las desigualdades y fortaleciendo la economía capitalista.

Los problemas sociales han transitado desde la esfera focalizada en aquellos desposeídos para situarse en el centro del problema estatal. Ya no afectan a clases sino que se vinculan a la sociedad en su conjunto, sobre todas las personas y grupos que la integran. Los, grandes problemas sociales contemporáneos —los problemas ambientales, por ejemplo— afectarían a todas las personas, al margen de su situación económica y su clase social. Son problemas cuyo remedio no es individual o privado, sino político.

Y el esquema en que se reproduce el Estado y la sociedad, ya no se vincula a dos sistemas autorregulados y separados entre sí, como era la propia voluntad liberal como mecanismo de garantía de la libertad y la propiedad. Ahora aparecen en un ejercicio de simbiosis, integrándose como en subconjuntos, donde el Estado se privatiza y la sociedad asume tareas públicas.

El Estado Social **se hace cargo de la conflictividad social. Se eliminan las fronteras entre Estado y sociedad**. El Estado interviene donde haya disfunciones estructurales de la sociedad y la sociedad toma el control del Estado mediante el ascenso de las fuerzas democráticas.²⁵ **Existe estatización de la sociedad y socialización del Estado y hay** ampliación competencial del Estado con habilitaciones generales de actuación y cláusulas sociales para la remoción de obstáculos y crear condiciones de libertad e igualdad para todos.

La superioridad del ESDD reside en el modo en que se hace cargo de las consecuencias sociales. No es un **Su prueba de fuego está en tiempos difíciles**, porque dependiendo del manejo político y económico, **fija garantías al retroceso de un modo compartido y no bajo el “efecto despeñadero” individual** en donde se fragilizan las economías insolidarias.

IV. CONDICIONES DEL ESDD Y EL MERCADO

La nueva organización constitucional supone algunas tareas significativas.

A. REVALORIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DEL ESTADO. El Estado asume un papel más importante, donde sea necesario, en varias áreas: inversión, estrategias redistributivas y regulatorias. Ninguna otra entidad tiene la capacidad para hacer a escala lo que puede hacer un servicio público comprometido: **prestar servicios a todos**, no solo los que pueden pagar, no solo

²⁵ José Esteve Pardo (2013), La nueva relación entre Estado y sociedad. Aproximación al trasfondo de la crisis, Marcial Pons, Madrid.

los que están cerca, y no solo aquellos cuyos problemas son menos agudos. Pero no resulta posible pensar el Estado como una continuidad de los existente. Implica una modernización de otra generación que permita construir programas públicos pluralistas, con soluciones a escala a lo largo del territorio y con objetivos de cumplimientos realizables y verificables.

- B. POTENCIACIÓN DEL MERCADO.** El ESDD no solo no es incompatible con el mercado sino que es uno de sus medios de realización más efectivos. Desde el orden constitucional se imponen los fines sociales pero no fija los medios y los libera a la solución democrática de cada momento. Por eso, es tan flexible ideológicamente como ningún otro modelo ha existido hasta la fecha. La promoción de la sociedad civil es un componente central del ESDD.
- C. LÍMITES DEL MERCADO.** El reconocimiento de este papel central del mercado no lo deja exento de límites. Hablamos de economía de mercado y no de sociedad de mercado, aludiendo a los límites morales²⁶ y sociales²⁷ que vienen de extender sus medios a todo objetivo de bien público incluyendo los derechos sociales. La mercantilización de esos derechos no es parte del programa ESDD.
- D. CENTRALIDAD DEL LEGISLADOR DEMOCRÁTICO.** El ESDD es la suma de tres cláusulas normativas. Es Estado de Derecho. Es Estado Social. Es Estado Democrático. Se trata de cambios normativos, desde el Derecho, acentuando los fines sociales presentes en cada Constitución pero definidos por el legislador de un modo que interprete cada tiempo presente y futuro. Actualmente ya es parte del ordenamiento constitucional chileno como promesa (art. 154.5 de la Constitución) y como propuesta para el plebiscito. Sea que se apruebe o rechace, esta noción ya será parte de nuestro derecho y es nuestro deber articularla con el orden económico, social y constitucional.
- E. INCLUSIÓN DE DERECHOS SOCIALES.** El desarrollo del ESDD supone la incorporación de derechos sociales en la Constitución en el contexto del constitucionalismo latinoamericano. La educación, la salud, el trabajo, la seguridad social y otros derechos son parte de nuestros ordenamientos, incluso durante el período del Consenso de Washington, lo que genera la gran paradoja de los derechos sociales²⁸ que han estado vigentes bajo contextos extremadamente neoliberales, lo que indica que el dilema central no es constitucionalizarlos únicamente los derechos sino configurar la institucionalidad que permite su realización. A eso denominamos: derechos de

²⁶ Michael Sandel (2013), Lo que el dinero no puede comprar. Los límites morales del mercado, Debate, Barcelona y Debra Satz (2015), Por qué algunas cosas no deberían estar en venta. Los límites morales del mercado, XXI siglo veintiuno editores, Buenos Aires.

²⁷ Carlos Peña (2018), Lo que el dinero sí puede comprar, Taurus, Santiago.

²⁸ Carlos Bernal Pulido (2018), Derechos cambio constitucional y teoría jurídica, Universidad Externado de Colombia, pp. 181-182.

organización y procedimiento.²⁹ Junto con eso es absolutamente necesaria la inclusión de mandatos al legislador, normas de fin, objetivos sociales y todo tipo de normas que permitan la ejecución de finalidades amplias, según quien dirija democráticamente el Estado.

F. POLÍTICA PÚBLICA Y GARANTÍA JURISDICCIONAL. Gran parte de los derechos sociales se ejecutan como derechos prestacionales con mandatos de realización a los poderes públicos. Lo anterior, también supone la articulación de un Estado administrativo que pueda recurrir a todas sus técnicas en la promoción, vigencia y solución a estos derechos sociales. Y, por cierto, es posible la existencia posterior de una judicialización probable en casos de conflictos o interpretaciones legítimas que la sociedad pueda tener sobre la aplicación de algunos de sus contenidos. En la tradición del ESDD no es consustancial la judicialización sino que más bien es un desafío inevitable.

El ESDD está lejos de ser un modelo estatista, y más bien obliga al Estado a satisfacer necesidades sociales mediante prestaciones por múltiples vías (subsidios, exenciones o servicios públicos directos e indirectos, sociedad civil activa y acceso a bienes públicos comunes). El ESDD tiene la virtud ideológica de no ser un instrumento de un sector sino que una creación colectiva de la socialdemocracia y los democristianos alemanes. Allí superó el Estado Liberal, aquí el Estado neoliberal.

El ESDD permite dotar de legitimidad al relato de una trayectoria social ascendente en contra de las desigualdades sociales y a favor de la inclusión. Amplía el horizonte de cumplimiento de los derechos sociales en el ámbito de las garantías institucionales, políticas públicas -centralizadas y regionales- y acciones jurisdiccionales. Mejora la perspectiva universalista de los derechos sociales. El ESDD no necesita exclusivamente de la Constitución para su establecimiento.

----- &. -----

Estamos en un camino en donde hay que volver a releer lo que nos ha pasado en este tiempo. Examinar nuestros fracasos y éxitos. Y darnos una oportunidad con modalidades que no hemos intentado y que dan éxito a democracias constitucionales que nos permiten reflejar un camino. Y como siempre recorrerlo como lo hemos hecho los chilenos, con esas vías particulares, extrañas pero efectivas.

²⁹ Miluska Orbegoso Silva (2018), Derechos fundamentales y prestaciones sociales. Una aproximación desde la teoría de la organización y el procedimiento, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.

LA MÉTRICA CONSTITUCIONAL

COMPARACIÓN CONSTITUCIÓN VIGENTE VS BORRADOR

Categoría	Constitución vigente	Borrador
Capítulos	15	17
Artículos permanentes	168	216
Disposiciones transitorias	53	62
Número de palabras	27.650 Sin transitorias ni permanentes de los dos procesos constituyentes	50.027 permanentes y 5815 transitorias
Principios	15	43
Derechos	48	73
Leyes institucionales	23 LOC	31
Organismos	21	41 (20 nuevos)
Obligaciones estatales de hacer		244

ORGANISMOS E INSTITUCIONES EN LA PROPUESTA CONSTITUCIONAL

CONTINUIDAD	NUEVOS
	Agencia Nacional contra la Corrupción (8.6)
	Defensoría Penal Pública (16.6.b)
	Defensoría de las Víctimas (16.6.c)
Consejo Nacional de TV (16.14.e)	
	Consejo para la Transparencia (16.15 y DT7)
	Instancia colegiada de Foros deliberativos (48.2)
Senado (51)	
Cámara de Diputadas y Diputados (51)	
	Oficina parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio (64.2)
	Consejo de Control Ético del Congreso (65)
Presidente o Presidenta de la República (90)	
	Sistema de alta dirección pública (110.7)
	Consejo de Evaluación de Leyes y Políticas Públicas (112)
Ejército (114)	
Armada (114)	
Fuerza Aérea (114)	
Carabineros de Chile (117)	
Policía de Investigaciones (117)	
	Gendarmería de Chile (121)

	Consejo de Gobernadores (129.4)
	Consejo de Alcaldes (129.5)
Gobierno regional (131.2)	
Consejo regional (135.1)	
Municipalidades (136.2)	
Concejo municipal (139)	
Corte Suprema (159)	
	Órgano de nombramientos judiciales (160 y 162)
	Órgano de formación y perfeccionamiento judicial (160 y 166)
	Órgano de gestión y administración del Poder Judicial (160 y 163)
	Tribunal de Conducta del Poder Judicial (165.3)
Tribunal Constitucional (168)	
	Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (174)
	Consejo Superior del SNAJDV (176.2)
Ministerio Público (177)	
	Fiscalía Supraterritorial (178.1 y 183)
	Consejo de Coordinación Interinstitucional (178.2 y 186)
	Consejo General del Ministerio Público (178.2 y 187)
Tribunal Calificador de Elecciones (190)	
Tribunales electorales regionales (191)	
Servicio Electoral (192.1)	
Consejo Directivo del Servicio Electoral (192.2)	
Contraloría General de la República (193)	
	Tribunal de Cuentas (196)
Tesorerías del Estado (197)	
Banco Central (198)	
	Consejo del Banco Central (201)
	Policía fronteriza (DT36)
23	24

Organismos totales: 47

Órganos de continuidad: 23

Órganos nuevos: 24

Organismos constitucionales autónomos: 15

Servicios públicos: 6

Fuerzas de orden y seguridad:

LA TRANSICIÓN CONSTITUCIONAL EN EL BORRADOR DE NUEVA CONSTITUCIÓN

Las transiciones constitucionales son centrales para identificar en qué estado queda y cómo se trata el derecho vigente después de la sustitución de la base del ordenamiento. No hay un modo de desarrollar una transición y esta es una especialidad del derecho constitucional latinoamericano que ha organizado extensas para Constituciones paralelas al lado de la Constitución propuesta.

Mirar la propuesta de borrador es clave y para ello nos centraremos en el examen de sus 62 disposiciones transitorias.

A.- La transición legal.

El texto contiene 38 referencias a proyectos de ley y no todos indican un ciclo respecto de los cuales deben ser despachados determinados proyectos de ley al Congreso. En primer lugar, describiré la tabla resumen de esos proyectos.

CUADRO RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE LEY DE LA TRANSICIÓN

Período de envío del proyecto	Cantidad
6 meses	1
1 año	16
18 meses	3
2 años	7
3 años	2
5 años	3
Plazo ad hoc condicionado	1
Sin plazos	2
Referencia implícita a proyecto de ley	3
Total	38

A continuación, se describe la tabla respectiva, incorporando el período dentro del cual debe despacharse como definición de las prioridades puestas al servicio de desarrollar el texto lo antes posible.

PROYECTOS DE LEY TRANSICIONALES Y PLAZOS

PLAZO	PROYECTO DE LEY
6 meses	Sobre excepciones a la exención constitucional de contribuciones (DT 14)
1 año	Crear la Agencia Nacional contra la Corrupción (DT5)
1 año	Adecuación de la ley antiterrorista (DT6)
1 año	Compensatoria de la disminución de ingresos municipales (DT 14)
1 año	Creación de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas e Impacto Regulatorio (DT 24).
1 año	Sobre cuota paritaria de escaños correctivos de género (DT 32)
1 año	Creación organismo constitucional de Administración judicial (DT 41)
1 año	Creación del Tribunal de Conducta (DT 42)
1 año	Organismo constitucional de formación judicial (DT 43)

1 año	Ministros suplentes de cortes. (DT 44)
1 año	Procedimiento contencioso administrativo y tribunales (DT 45)
1 año	Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas (DT 52)
1 año	Creación de la Fiscalía Supraterritorial y del Consejo de Coordinación Interinstitucional del Ministerio Público (DT 53)
1 año	Destinación temporal de fiscales y funcionarios del Ministerio Público (DT 56)
1 año	Creación del Tribunal de Cuentas (DT 60)
1 año	Adecuatoria de la Ley institucional de Municipalidades (DT 61)
1 año	Adecuatoria de la Ley institucional de Gobierno y Administración regional (DT 61)
18 meses	Adecuatoria de la ley de estados de excepción constitucional (DT 18)
18 meses	Transferencias de competencias a los gobiernos regionales (DT38)
18 meses	Creación de órgano constitucional de nombramientos judiciales (DT40)
2 años	Procedimiento de compensación de cargas legales discriminatorias (DT15)
2 años	Regulación acción de protección (DT 17)
2 años	Regulación acción de amparo (DT17)
2 años	Nuevo régimen de empleo público (DT 34)
2 años	Estatuto de Rapa Nui (DT 39)
2 años	Estatuto del Archipiélago Juan Fernández (DT 39)
2 años	Adecuar procedimiento e instituciones ambientales del Capítulo XVII (DT 62)
3 años	Forma y cumplimiento de las sentencias de tribunales extranjeros (DT4)
3 años	Plan de Salud Universal (DT 9)
5 años	Procedimiento del control ético de las profesiones (DT8)
5 años	Casos y procedimiento de revocación de nacionalización por gracia (DT16)
5 años	Creación de la policía fronteriza (DT 36)
Ad hoc	Demarcación de distritos electorales en 18 meses desde la nueva legislatura (DT29)
Sin plazo	Adecuación ley Tricel (DT 58)
Sin plazo	Adecuación ley tribunales electorales regionales (DT 58)
Implícito	Sobre reclamaciones contra resoluciones sancionatorias de los tribunales supremos de los partidos políticos (DT19)
Implícito	Procedimiento, órgano competente y sanciones por no votar (DT21)
Implícito	Procedimiento de concurso público para fiscal nacional, fiscales regionales y adjuntos (DT54)

B.- Tipos de normas.

No existe una filosofía tipo sobre qué tipo de normas deben integrar las reglas sobre disposiciones transitorias. Incluso hay algunas que son absolutamente centrales para el ejercicio cotidiano del derecho y que deberían estar en la parte permanente de

la Constitución como son los casos de las normas derogatorias del texto constitucional anterior y de cómo se resuelve el dilema de la normativa vigente.

Pero bajo esta idea “espacial” y no “normativa” de la dimensión transicional a continuación identifico los distintos tipos de norma que se encuentran presentes en el texto constitucional.

CARACTERÍSTICAS NORMATIVAS DE LAS REGLAS TRANSITORIAS

Tipo de norma	Número específico de la DT
Derogatoria	1, 2
Fecha de entrada en vigor	1, 12
Adecuatoria formal	2
Interpretación conforme a la Constitución	13
Interpretativa	7, 37, 46, 48, 51
Vigencia gradual	10, 14, 28
Ultractividad constitucional	11, 212, 49, 55
Norma supletoria	15, 17, 19, 21, 47, 54
Aplicación no contraria	18
Inaplicación norma legal	20
Establecimiento de requisitos normativos	22, 26, 31
Deber de un órgano	23, 25, 29, 30, 39, 52
Medidas presupuestarias	27, 58
Tramitación ad hoc	29
Adecuación reglamentaria	33, 35
Órganos supletorios	41, 42, 43
Continuidad de personal	34, 50, 57, 59
Derecho a opción de cambio normativo	34

En este conjunto de normas hay algunas definiciones que revelan técnicas constitucionales más o menos conocidas como la fecha de vigencia, la gradualidad de la misma, las normas derogatorias, las normas adecuatorias o supletorias.

Sin embargo, hay un par de técnicas que incurren en la determinación de objetivos políticos indudables.

a. Las normas interpretativas que evitan la intervención jurisdiccional.

Una de las lecturas prácticas de estas normas es fijarse en las sentencias interpretativas porque determinan de una vez para siempre lo que es constitucional. Qué cuestiones son:

1. Que todos los regímenes previsionales vigentes son conformes a la Constitución con lo que, de paso, resuelven todo problema de tramitación de reformas en el sector. (DT 13)

2. Que el órgano que promueve y fiscaliza el derecho de acceder a información pública es el Consejo para la Transparencia y su ley institucional es la L.20.285. (DT7).
3. Que las autoridades designadas por el Presidente en regiones y provincias son el delegado presidencial regional y el delegado presidencial provincial. (DT 37)
4. Que el régimen disciplinario rige desde los hechos posteriores a la vigencia de la ley que crea el nuevo sistema de control judicial (DT 46).
5. Que el límite de edad no rige a los Ministros de la Corte Suprema que está en vigencia, con lo que se evita establecer una norma anti Sergio Muñoz. (DT 48)
6. Norma interpretativa de contabilidad de las fracciones en la determinación de un quórum en votaciones de órganos colegiados (DT 51).

b. Las prioridades políticas.

En el aspecto organizativo de las normas transicionales surge rápido el tema de las prioridades políticas.

Si el objetivo fuera instalar el Estado Social y Democrático de Derecho solo aparecen dos reglas comprometidas con la dinámica social.

La primera es ultraurgente: la identificación dentro de 6 meses de las excepciones a la regla general de exención de pago de las contribuciones y la otra es que dentro de 3 años debe enviarse el proyecto sobre el Plan Universal de Salud.

De hecho, la única medida autoejecutable es la garantía constitucional de conformidad de todos los sistemas previsionales lo que es un contrasentido porque al interior conviven todos los modelos existentes (contributivos, de reparto, mixtos, con múltiples operadores o monoperadores, etc.).

c. Características normativas de la transición.

En el modelo descrito de normas advertimos una tendencia a una configuración gradual del tránsito entre las leyes antiguas y el nuevo ordenamiento constitucional adoptando la idea de una derogación expresa de la normativa bajo dos formatos: derogación por inconstitucionalidad mediante el TC y derogación por mérito mediante el Congreso.

La transición sí es radical respecto de las normas infralegales. No están protegidas que, aunque diga “normativa” se refiere a asuntos sobre los cuales ni el Congreso ni el TC tienen competencia. La única manera de resolver este error es dotando a los tribunales ordinarios de poder derogatorio orgánico o tácito sobre estas normas infralegales, cuestión que va en el sentido contrario al DT 2 y que incrementa la judicialización.

También a destacar los deberes estatales, puesto que algunos de ellos salen de lo común y abarcan propósitos políticos contingentes:

1. Deber del Congreso Nacional de establecer un repositorio de información desde la participación ciudadana.
2. Fecha de actualización de los escaños en abril de 2024 por parte del Consejo Directivo del Servel. De hecho, ésta es la primera decisión de la transición.
3. Obligación del Consejo Directivo del Servel de demarcar distritos por densidad, igualdad del voto y respeto a la división político administrativa.
4. La propuesta de demarcación debe contemplar 138 diputados y el Congreso debe aprobarla y si no rige la iniciativa de Servel.
5. Consulta indígena previa en Rapa Nui antes del Estatuto de Rapa Nui.
6. El proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas debe ordenar la reagrupación en un servicio único de todos los programas estatales de protección a víctimas.